

HASTA LUEGO SEÑORA PILLAY

Camilo González Posso

Muy áspero se mostró Juan Manuel Santos con la señora Pillay al decirle por micrófono que “Colombia no necesita más a las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos”. Hace solo unas semanas, en Ginebra, el gobierno le había anunciado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas su intención de renovar por tres años, hasta octubre de 2016, el acuerdo de asistencia para superar la situación de graves violaciones a los derechos humanos. Con esa expectativa fue invitada esta señora, que es la máxima figura de la ONU para de la defensa de los derechos humanos, y sin mediar mayores explicaciones se le notificó que bien podía comenzar a cerrar su oficina en Colombia.

Pero, más allá de las indelicadezas diplomáticas, lo que se ha abierto es un espacio de evaluación sobre la situación humanitaria en Colombia y la necesidad de una observación cotidiana desde instancias internacionales. El Presidente Santos y sus ministros argumentan que la mejoría en garantía de derechos humanos y en fortalecimiento de instituciones, ha creado un nuevo escenario en el cual ya no es necesaria una vigilancia internacional que nació en un momento en el cual el Estado colombiano estaba cuestionado por la comunidad de naciones por su incapacidad para superar la crisis humanitaria.

Esta administración quiere dar el mensaje al mundo de que se cuenta con un Estado listo para autoregularse, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son asunto del pasado o residuos de un pasado que se está cerrando, que no se necesitan condicionamientos en la cooperación internacional ni en los tratados de libre comercio y que se está en condiciones de integrarse al club del primer mundo, bien sea en la OCDC o en la antesala de la OTAN.

Con tantas ambiciones de certificación democrática, para el gobierno Santos es incomodo que una Oficina que tutela derechos de la población en situaciones de alto riesgo humanitario, siga teniendo presencia en Colombia. Y más incomodo que en sus informes y comunicados periódicos siga haciendo alusión a graves violaciones aunque, al mismo tiempo, reconozca que la situación ha mejorado notablemente con respecto a la década anterior y al panorama que encontró Almudena Mazarrasa cuando llegó en 1997.

En los últimos años la piedra del escandalo han sido el destape de la práctica de reclutamientos y detenciones arbitrarias con fines homicidas como recurso frecuente en las fuerzas armadas, la utilización con fines criminales de los servicios de inteligencia del Estado, el ocultamiento de la gravedad del desplazamiento forzado y de otros crímenes de las llamadas BACRIM, la inoperancia de los procesos de justicia y paz (ley 975/2005).

Las preguntas de los organismos defensores de derechos humanos en la audiencia realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fueron, entre otras, si ya se superó el estado de cosas inconstitucional en cuanto a desplazamiento y desaparición forzados, si hay garantías de justicia y si reformas como la del fuero militar van en la dirección correcta; las comunidades indígenas y afrodescendientes reclaman por varios centenares de homicidios en medio del conflicto durante esta administración y los campesinos informan del asesinato de reclamantes de tierras y de la precariedad de la restitución y el retorno. Por su parte, el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro le entregó las llaves de la ciudad a la ilustre visitante y la invitó a seguir con su ayuda para superar definitivamente la guerra y transitar a la paz. Todos ellos encuentran eco en la Oficina de la Alta Comisionada que, sin abandonar el lenguaje diplomático, en su informe de visita entregado el pasado 19 de julio, sigue poniendo el dedo en la llaga de la impunidad, criticando esa reforma del fuero militar y advirtiendo que seguirá con celo las prácticas de la justicia castrense. La mención de la reciente masacre en el Catatumbo, en un comunicado de los delegados de la Señora Navi Pillay en Colombia, ha merecido el rechazo del gobierno que se ve desbordado por la protesta social.

Al Presidente Santos le preocupa que la percepción internacional sea que Colombia de un organismo con cáncer y SIDA en los noventa, haya pasado a otro con medio SIDA, que es menos

grave pero sigue siendo mortal; y se ha dado un plazo de un año para que, con el desenlace del proceso de paz que avanza en La Habana, se den todas las señales de paso a la madurez democrática y en derechos humanos. Mejor dicho, la apuesta es que con la paz llegue la vacuna contra el medio SIDA y entonces los esfuerzos de la transición sean más visibles que las realidades del horror. Ya veremos si es un adiós o un hasta luego.

camilogonzalezposso@gmail.com Bogotá D.C. julio de 2013.